

69.<sup>a</sup> REUNION. CONTINUACION DE LA 7.<sup>a</sup> SESION DE PRÓRROGA

PRESIDENCIA DEL DR. ELISEO CANTON

**Diputados presentes:** Acosta, Agote, Alvarez (A.), Alvarez (J. M.), Anchorena, Arias, Avellaneda, Ayarragaray, del Barco, Bréard, Calderón, Calvo, Cárcano, Carlés (M.), Castañeda Vega, Castex, Cernadas, Conforti, Correa, Costa, Echagüe, Escobar, Estrada, Etcheopar, Etcheverry, Ferrer, Fonrouge, Fraga, Freire, Frias, García Vieyra, Garrido, González Bonorino, Guasch Leguizamón, Hernández, Iturbe, Lacasa, Lassaga, Lavié, López (P. C.), Lubari, Luro (P. O.), Luro (S.), Llobét, Méndez Casariego, Meyer Pellegrini, Molina (E.), Montes de Oca, Moreno, Moyano (F. J.), Moyano (R.), Mugica, Olivera (B.), Olmedo, Padilla (E. E.), Padilla (M. M.), Parera (F. M.), Parera (R. A.), Penna, Peña, Pera, Pérez Virasoro, Pinedo, Roca, Rodríguez Jurado, Ruiz Moreno, Santamarina, Sosa Carreras, Terán, Varela, Vega, de la Vega, Vernazza, Voces Giménez, Zambrano.—**Ausentes con licencia:** Bengolea, Candiotti, Gómez, Gonnet, López (M. E.), Ortiz.—**Con aviso:** Bonifacio, Bouquet, Carlés (C.), Carranza, Galigniana Segura, Goenaga, Guevara, Lezica, López Mañán, Loza, Marza, Molina (M.), Oliver, Olivera (G. P.), Paz (A. C.), Paz (M.), Revilla, Saavedra Lamas, Serrey, Tenreiro.—**Sin aviso:** Alsina, Bejarano, Beltrán, Crouzeilles, Day, García, García González, Iriondo, Leiva, Pinasco, Rivas, Vergara.

SUMARIO N.º 69

1  
Autorización á la presidencia para entregar á la señora viuda del ex diputado doctor Ezequiel Gallo las dietas que á éste hubieran correspondido hasta terminar su mandato.

2  
Peticiones particulares.

3  
Aprobación de un proyecto de ley fijando la jurisdicción territorial de los juzgados federales de la provincia de Córdoba.

4  
Continúa la discusión en particular del proyecto de reforma á la ley electoral.

5  
Moción aprobada para celebrar sesiones diarias.

6  
Prosigue la consideración en particular del proyecto de reforma de ley electoral.

—En Buenos Aires, á 4 de diciembre de 1911, el señor presidente declara reabierta la sesión á las 4 y 40 p. m., con asistencia del señor ministro de justicia é instrucción pública, doctor Juan M. Garro.

**Sr. Presidente**—La honorable cámara había designado la sesión de hoy para ocuparse del asunto relativo al juzgado de Bell-ville, con presencia del señor ministro.

—Al ponerse á votación en general el proyecto precedente, dice el

**Sr. Roca**—Alguna razón ha de tener la presencia del señor ministro en el recinto, que me parece que no será la de simple testigo de la votación.

Ha habido dos propósitos respecto de este asunto: uno, fijar la residencia del juzgado federal de que se trata en Bell-Ville, asignándole jurisdicción sobre ciertos departamentos; y otro, que fija la residencia de los dos juzgados en la ciudad de Córdoba.

Creo que es indispensable conocer la opinión del señor ministro para resolver la cuestión.

**Sr. Ministro de justicia é instrucción pública**—Pido la palabra.

No tengo inconveniente en hacer conocer la opinión del Poder ejecutivo sobre este asunto, cuyos antecedentes conoce la honorable cámara.

El juzgado federal de Bell-Ville fué creado por la ley de presupuesto para 1910. Nombrado el juez y todo el personal, se echó de ver muy luego que no tenía de qué ocuparse, por falta de causas que reclamaran su juzgamiento; y esto provenía de que se entendió que la jurisdicción del juzgado estaba limitada á la población de Bell-Ville, que apenas si cuenta con diez ó doce mil habitantes.

Para remediar esta situación, el Poder ejecutivo, en los últimos meses de la administración anterior, remitió al Congreso el proyecto que se acaba de leer, fijando la jurisdicción de los dos juzgados federales de la provincia de Córdoba.

Para el juzgado de Bell-Ville se asignan, creo, doce departamentos. Y pienso que si el proyecto se sanciona, el juzgado ha de tener trabajo en adelante, porque se trata de regiones muy importantes por su riqueza pecuaria y agrícola, que se hallan en pleno desenvolvimiento y cuya población aumenta rápidamente.

Se ha objetado, me parece, la improcedencia de sostener el juzgado en Bell-Ville, observándose que no hay allí foro. Es cierto, no lo ha habido hasta ahora: pero la razón es que tampoco ha habido asuntos. Habiendo asuntos—y los habrá—que han de ir en aumento si el proyecto se sanciona, evidentemente

te habrá elementos de foro, es decir, habrá abogados y procuradores, porque entonces serán necesarios.

Por estas breves razones, y por las ventajas inherentes á la descentralización de la justicia, mi opinión es que debe ensayarse la permanencia del juzgado en Bell-Ville, con la jurisdicción que le asigna el proyecto que se ha leído.

—Sin observación, se aprueba en seguida el proyecto, en general y en particular.

**Sr. Presidente**—Queda sancionado.

4

LEY ELECTORAL

**Sr. Presidente**—Continuará la discusión de la ley electoral.

—Ocupa su banca el señor ministro del interior doctor Indalecio Gómez.

—Al iniciarse la lectura del artículo 7.º dicen los

**Sres. Varela y Calvo**—Hay que suprimir ese artículo.

**Sr. Agote**—Todo lo referente al voto obligatorio debe suprimirse.

**Sr. Presidente**—¿La comisión no insiste tampoco en su despacho?

**Sr. Fonrouge**—No, señor.

—Al leerse el artículo 8.º, dice el

**Sr. Fonrouge**—Pediría que se dejara sin votar este artículo, porque no debe quedar ya aquí; no tendría relación alguna con sus antecedentes.

De manera que pido se reserve para tratarlo en su oportunidad.

**Sr. Presidente**—Queda suspendida la consideración del artículo 8.º, á pedido de la comisión.

—En discusión el artículo 9.º

**Sr. Lacasa**—Pido la palabra.

Quisiera saber de la comisión por qué ha cambiado el nombre de fiscal por el de apoderado.

**Sr. Fonrouge**—Voy á darle la razón.

Se le denomina apoderado y no fiscal, porque hasta ahora, por el sistema vigente, bastaba simplemente una nota del comité al presidente de la mesa para acreditar el carácter de fiscal á cualquier ciudadano, y este fiscal no incurria en faltas de ninguna clase ni en responsabilidad para con las personas que pudiera tachar.

Por esta ley se ha querido rodear á estos representantes de todos los caracteres del mandatario, á fin de establecer una vinculación de orden legal, entre ellos y los mandantes, como también respecto de las personas que pudieran ser tachadas durante la elección.

De otro modo los fiscales seguirían siendo lo que han sido, y he de recordar que no siempre han desempeñado sus funciones teniendo en vista el interés público. Muchas veces han ido á las mesas con propósitos políticos, á fin de retardar la elección, con un plan meditado, y no para velar por el cumplimiento de la ley.

Con estos antecedentes la comisión, al cambiar las funciones de estos representantes, haciéndolas más amplias y estrictas, ha cambiado su denominación, que ya no resultaba adecuada. De esta manera su intervención tendrá lugar en una forma seria y legal, y todas las responsabilidades que puedan emerger de sus actos tendrían su sanción oportuna.

**Sr. Lacasa**—Entonces, según la comisión, el apoderado viene á ser como un funcionario curial, más que el representante de un partido político que va á fiscalizar la verdad de la elección, y por esto me parecía que no sonaba bien ese término «apoderado».

Ahora el presidente de la comisión nos dice que es un mandatario.

**Sr. Fonrouge**—Con responsabilidades.

**Sr. Padilla (M. M.)**—En el proyecto que se discute no se establecen los apoderados con las formalidades previstas en el proyecto del Poder ejecutivo.

**Sr. Fonrouge**—Es exacto.

**Sr. Padilla (M. M.)**—De todas esas disposiciones sólo se ha conservado el nombre de «apoderado».

**Sr. Fonrouge**—No, señor; lo que no se ha conservado es el requisito de es-

criturar el mandato ante el escribano público.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Entonces, no se trata de un instrumento en forma; se va á hacer lo mismo que se hace ahora.

**Sr. Fonrouge**—No, señor diputado, Permítame.

Cuando se habla de apoderado es evidente que tiene que ser provisto el que recibe el mandato de un instrumento suficiente que lo acredite como tal, y en este caso existe, porque se exige que sea autenticada la firma del candidato y del apoderado.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Pero es un documento simple.

**Sr. Fonrouge**—Sí, señor; es un documento.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Documento privado, que no tiene el carácter de escritura pública como se había previsto en el proyecto del Poder ejecutivo.

**Sr. Fonrouge**—Documento que surtirá iguales efectos que la escritura pública, desde el momento que deben autenticarse las firmas ante el presidente del comicio ó ante un escribano público.

No tendrá toda la solemnidad y superabundancia de un poder ante escribano, pero será igualmente eficaz en sus resultados.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Será lo mismo que se hace ahora, que se manda al fiscal con una nota del comité.

**Sr. Carlés (M.)**—No tendrá los caracteres del mandato, pero sí los de un nombramiento.

**Sr. Fonrouge**—Sí, señor.

**Sr. Carlés (M.)**—Perfectamente.

**Sr. Lacasa**—Viene á ser un nombramiento de apoderado de los candidatos.

Habrá muchísimos candidatos; será el comicio una especie de foro de apoderado.

**Sr. Varela**—Está previsto más adelante el caso.

**Sr. Estrada**—Se nombra uno solo por cada lista.

**Sr. Lacasa**—De todas maneras, la palabra no me suena bien.

**Sr. Vocos Giménez**—Pido la palabra. Pediría á la comisión suprimiese algunas palabras de este artículo.

No sé por qué razón se exige que los candidatos sean públicamente proclamados.

Puede existir el caso de un candidato que no haya sido proclamado en público, y por esta disposición no estaría habilitado para controlar el acto electoral.

Propongo, pues, que se diga «los candidatos», suprimiendo lo relativo á la proclamación.

**Sr. Estrada**—No hay candidatos que no sean proclamados.

**Sr. Vocos Giménez**—Le citaría el caso de la candidatura de Sarmiento para presidente de la República: no fué proclamado y resultó electo.

**Sr. Varela**—Y no fué porque no hubiera partidos.

**Sr. Fonrouge**—La comisión no puede deferir al pedido del señor diputado, porque está en la índole de esta clase de asuntos que todos los actos deben ser públicos.

Una proclamación tiene necesariamente que ser pública; no puede ser clandestina; de manera que está perfectamente el término que se emplea.

Lamento mucho no poder diferir al pedido del señor diputado.

—Se vota y aprueba el artículo 9.º

—En discusión el artículo 10.

**Sr. Agote**—¿Es obligatorio esto?

**Sr. Ministro del interior**—Pueden remitir.

**Sr. Estrada**—Es facultativo.

**Sr. Agote**—Parece que fuera imperativo, porque dice: «serán hechas...»

**Sr. Ministro del interior**—Cuando les manden; cuando hayan hecho uso de esta facultad.

**Sr. Estrada**—El artículo 9.º dice: pueden. Es facultativo.

**Sr. Meyer Pellegrini**—De manera que consta claramente en el artículo 10 que esos nombramientos no necesitan autenticidad de ninguna clase, que basta la firma de uno de los candidatos.

**Sr. Fonrouge**—Permítame el señor diputado. La autenticidad la requerirá ó no el presidente del comicio.

**Sr. Meyer Pellegrini**—El presidente del comicio no puede requerir más condiciones que las que estipula el artículo 10, con el cual estoy conforme.

**Sr. Fonrouge**—Sí, señor.

**Sr. Meyer Pellegrini**—Que no resulte más tarde que sea necesario presentarse con escribano público ó con testimonios

auténticos para acreditar la firma de cada uno de los candidatos!

**Sr. Fonrouge**—Pido la palabra.

Es necesario que quede muy claramente establecido que es indispensable que sean firmas auténticas, por las ulteriores de los actos de estos apoderados; pues en el capítulo de las penalidades se establece cuáles son las de los candidatos y de los apoderados, cuando procedan los últimos maliciosamente al atacar ó desconocer la identidad de un elector, en cuyo caso podría muy bien suceder que se presentaran con documentos ó con firmas que no fuesen auténticas y que los mismos candidatos eludieran la responsabilidad negando su autenticidad.

Conviene, pues, en presencia de la observación que hace el señor diputado, establecer que las firmas deben ser auténticas: que es indispensable que no quede la menor duda de que son firmas auténticas.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Pero ¿cómo se van á autenticar las firmas de miles y miles de nombramientos?

**Sr. Fonrouge**—Es necesario que sean auténticas.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Tome la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que representa el señor diputado, y considere cuántas mesas se van á instalar...

**Sr. Fonrouge**—Pero los candidatos no son tantos.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Pero ¿quién va á autenticarlas?

**Sr. Fonrouge**—Ante un escribano público.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Esa es la situación. El día de la elección no es posible andar buscando escribano para que certifique la autenticidad de las firmas.

**Sr. Fonrouge**—Entonces, el señor diputado afirma que es lícito ir con firmas falsas.

**Sr. Agote**—En ese caso, la acción judicial se haría sentir sobre ellos.

**Sr. Calvo**—Tenía yo entendido que era el presidente del comité político á que pertenecía el candidato quien referendaba esos documentos; por eso aceptaba el artículo.

**Sr. Meyer Pellegrini**—Es entendido, á mi juicio, que cualquier apoderado que se presentara con un documento que lleve una firma falsa estaría sujeto á las leyes penales generales, como to-

dos los que cometen fraudes en un documento.

**Sr. Fonrouge**—Sí, señor; pero voy a observarle al señor diputado que el propósito es éste: puede existir un designio político de impedir que una elección se desarrolle en la forma normal, á fin de pedir después su anulación; y entonces se manda allí un fiscal, que sea un matón, que es el procedimiento notoriamente conocido de que se ha venido echando mano...

**Sr. Meyer Pellegrini**—Pero, señor; por esta salvedad de la autenticidad de las firmas, no se va á convertir un matón en un cordero...

**Sr. Fonrouge**—... el robo de las urnas y papeletas; y entonces...

**Sr. Agote**—No va á haber ya nada de eso, señor diputado; ya van á quedar suprimidos esos recursos...

**Sr. Fonrouge**—Le pido al señor diputado que no me interrumpa.

**Sr. Agote**—Después de la sanción de esta ley, ya no ocurrirán esas cosas...

**Sr. Fonrouge**—No estamos dialogando; estamos considerando este asunto dentro de las disposiciones del reglamento, que es una garantía para que todos podamos exponer nuestras razones con orden, con método y con libertad.

**Sr. Agote**—Pero como conozco la benevolencia del señor diputado y sé hasta dónde llega...

**Sr. Fonrouge**—No es cuestión de benevolencia.

**Sr. Presidente**—Es cuestión de reglamento. (Risas.) Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Fonrouge**—Se trata de eso justamente. Es un acto en que ahora la ley quiere que no sea como antes. Estos fiscales han sido, en la ley electoral, un elemento de perturbación en los comicios, y lo que se busca ahora es que no sean elemento de perturbación, sino que hagan precisamente cumplir la ley por medio de su contralor.

Esta es la razón por la cual es indispensable que estos apoderados vayan allí bajo la responsabilidad del que les confirió el mandato, á cumplir con su deber y no á cometer actos ilegales so pretexto de que van á fiscalizar el comicio.

De manera que la observación que hace el señor diputado por Tucumán,

no resiste á la crítica; por más que no pueda desconocerse que en el terreno de la hipótesis se pueden dar razones como las que da el señor diputado.

Puedo yo citar uno de los cuerpos electorales mayores de la República, que es la provincia de Buenos Aires, y puedo asegurar á la cámara, como lo sabe cada uno de los señores diputados, que no hay allí más de tres, cuatro ó cinco partidos que vayan á luchar; y no veo qué dificultad puede haber en que los interesados nombren su respectivo apoderado en todos los partidos de la provincia para que intervengan en el acto electoral.

**Sr. Castex**—Pido la palabra.

En la provincia de Buenos Aires hay 106 partidos y 500 mesas, es decir, 500 presidentes de comicio. Por consiguiente, los candidatos deberían otorgar ante escribano público 500 poderes á igual número de personas, de los que habría que sacar 500 copias...

**Sr. Padilla (M. M.)**—No habla el artículo de copias.

**Sr. Castex**—... para entregar una á cada presidente de comicio.

**Sr. Estrada**—En cada localidad.

**Sr. Castex**—Deberá entonces cada candidato recorrer los 100 partidos de la provincia para constituir sus apoderados.

**Sr. Estrada**—El poder otorgado ante escribano público vale en toda la provincia, como instrumento público que es.

**Sr. Castex**—Sí, pero deben constituirse 500 apoderados.

**Sr. Fonrouge**—Pido la palabra.

Para hablar por última vez.

El artículo tal cual está redactado deja implícitamente al presidente del comicio, la resolución de cada caso respecto al mandato, aceptándolo ó rechazándolo. Nada más.

De manera que yo creo que no hay para que discutir más. Aquí no se habla de escribano público. El proyecto primitivo hablaba de escribano. La comisión lo elimina y queda en esta forma la prescripción relativa á este punto.

**Sr. Padilla (M. M.)**—De manera que el presidente del comicio tiene derecho á pedir que se autentique el poder por escribano público.

**Sr. Avellaneda**—No tiene derecho.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Sí, lo tiene, según lo que acaba de manifestar el señor diputado.

**Sr. Avellaneda**—Según lo que diga el artículo.

**Sr. Fonrouge**—De manera que si hay un presidente de comicio que rechace un mandato arbitrariamente, también la ley establece las penalidades en que incurre en ese caso el presidente del comicio.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Pero si él cree que es necesario autenticar el mandato, entonces habrá que respetar su creencia.

**Sr. Fonrouge**—El cargará con la responsabilidad.

**Sr. Terán**—Pido la palabra.

No me explico el agregado que pide el señor diputado, porque veo que el proyecto del Poder ejecutivo consignaba primitivamente la obligación de que fuera ante el escribano público, y en el despacho de la comisión de negocios constitucionales eso está suprimido.

Entiendo que dentro de las prácticas electorales observadas en los comicios y dadas las dificultades con que se tropieza en la campaña, mucho más en este caso, el propósito del Poder ejecutivo sería imposible dentro del acto electoral siempre autenticando las firmas de los mandantes en el caso de nombramiento de apoderados.

**Sr. Fonrouge**—Que se vote el despacho de la comisión.

**Sr. Presidente**—Se va á votar el artículo en la forma propuesta por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 11.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Pido la palabra.

Voy á pedir la supresión de este artículo por considerarlo absolutamente contrario hasta á los principios generales del derecho.

Se ha estado invocando aquí el mandato como base de todas estas obligaciones y condiciones que estamos discutiendo. Y bien: cuando el candidato ó un partido político nombra un fiscal como apoderado, le da simplemente la facultad de hacer las impugnaciones en el comicio. De manera que la responsabilidad del mandante no puede ir más allá. Pero en el caso de este artículo resulta que por cualquier extralimitación

que haga, en lo que no puede tener responsabilidad ninguna el presidente del partido ni el candidato, se va á hacer responsable á ese mismo candidato. En esa forma no hay fiscalización posible.

Es por estas breves consideraciones, y especialmente por creer que esto viene á subvertir principios fundamentales de la ley común, que pido la supresión de este artículo.

**Sr. Fonrouge**—Pido la palabra.

El señor diputado, fundado precisamente en los principios del mandato, debe recordar que los actos del mandatario obligan al mandante siempre que esto se haya hecho dentro de los límites...

**Sr. Padilla (M. M.)**—Es que el mandato que yo le doy es para impugnar correctamente y no incorrectamente!

**Sr. Fonrouge**—Hay un artículo en este despacho que establece que las impugnaciones no pueden tener más objeto que la identidad. El mandato no tiene más que este objeto: que todo elector falso pueda ser impugnado.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Razón de más, porque yo no puedo dar instrucciones precisas.

**Sr. Fonrouge**—Toda otra impugnación que haga está fuera del mandato. Es sólo la impugnación que haga del elector.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Perfectamente; pero si hace una falsa impugnación, ¿el candidato se va á responsabilizar por eso? Puede ser un apoderado matón, como decía el señor diputado...

**Sr. Fonrouge**—Vuelvo á repetir que todas las disposiciones de esta ley política tienen su razón de ser fundadas en principios y la mayor parte en hechos perfectamente reconocidos.

Los fiscales, por lo general, han sido elementos de perturbación en los comicios: son personas que han ido allí nada más que á perturbar el acto electoral, á hacer perder tiempo, á fin de que la mayoría de los electores pacíficos se queden sin poder ejercer el sufragio. Entonces, lo que se ha buscado es que los candidatos, al designar sus apoderados, tengan el tacto y discreción suficientes de nombrar personas que vayan leal y correctamente á desempeñar sus cargos y no á perturbar el acto político; porque de otra manera, si se dejara libre al mandatario de toda responsabilidad, con respecto á los

actos de su mandante, entonces estos elementos de perturbación serían los que vendrían á desempeñar estas funciones.

Por otra parte, está dentro del sistema del mandato que los actos del mandatario obligan al mandante cuando están en los límites del mandato.

**Sr. Padilla (M. M.)**—No doy mandato para impugnar falsamente.

**Sr. Fonrouge**—La ley dice terminantemente que los fiscales no tienen más misión que verificar la identidad del elector. De ahí no pueden pasar.

De manera que esa es la función del mandante. Si este apoderado extiende sus funciones á otros actos de violencia, en esto absolutamente no tiene nada que hacer el candidato; y hay otra disposición, más adelante, cuando se trata de las penalidades, en que se establece que esta responsabilidad de los apoderados y de los candidatos es solidaria, justamente por esa razón.

**Sr. Calvo**—Pido la palabra.

La ventaja que yo encuentro al artículo es otra, más importante que todo eso. El tachado tiene que ir arrestado, y entonces, naturalmente, tendrá que incurrir en alguna responsabilidad el que hace que lo manden arrestado. El votante falso, inmediatamente es arrestado; y entonces viene después el artículo en que se fija la responsabilidad que tiene; es decir, doscientos pesos de multa.

Por eso me satisface el artículo.

**Sr. Vocos Giménez**—Voy á votar en contra del artículo, como el señor diputado por Tucumán, porque creo que esta disposición contraría absolutamente las más elementales reglas de la imputabilidad penal. Según este artículo, se cometería el delito por intermedio del mandatario, y la responsabilidad penal sería para el mandante.

**Sr. Padilla (E. E.)**—La responsabilidad pecuniaria.

**Sr. Calvo**—Los doscientos pesos de multa.

**Sr. Vocos Giménez**—Pero no dice que sea personal.

**Sr. Fonrouge**—Lea el artículo 82 del despacho.

**Sr. Vocos Giménez**—Es una responsabilidad penal, es una pena pecuniaria por cada apoderado; de manera que en la Capital se elevaría á una suma crecida.

Por otra parte, la impugnación que ha-

ga el mandatario, no quiere decir que se tendrá como una verdad que impedirá votar al impugnado, porque esto lo resolverá simplemente el presidente del comicio; mientras que si este artículo se deja subsistente, ¿qué es lo que sucederá? Que los candidatos no designarán apoderados. ¿Por qué? Por el temor de incurrir en una responsabilidad personal, que establece la ley, y no habrá control del acto electoral. De manera que se llegaría á un resultado completamente contrario al propósito que tendría la ley.

**Sr. Rodríguez Jurado**—Pido la palabra.

Estoy conforme con la exposición que acaba de hacer el señor diputado por Santa Fe. Creo que el verdadero responsable, si hay extralimitación del mandato, es el apoderado, no el poderdante; porque éste puede sostener que lo ha nombrado á objeto de regularizar la elección y no de enviar votos falsos al comicio.

De manera que podría conciliar todo diciendo el artículo que si el apoderado hace su denuncia falsa, él es el responsable, no el poderdante.

**Sr. Fonrouge**—Eso es contrario á la expresión del mandato.

**Sr. Rodríguez Jurado**—Creo que el verdadero responsable de la extralimitación, consistente en una denuncia falsa, es el apoderado, no el poderdante. De manera que creo que se conciliaría el propósito de la comisión si se dijera que si el apoderado hace una denuncia falsa él será el responsable. Alguno tiene que ser responsable, pero no creo que sea el candidato.

Propongo, para el caso que se rechazara este artículo, que si los apoderados hacen denuncias falsas, ellos serán los responsables.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Eso ya está dicho.

**Sr. Anchorena**—Pido la palabra.

Desde el momento que los candidatos nombran apoderados, no se puede eliminar el artículo 11, porque entonces queda burlada por completo la seriedad del mandato que otorga el candidato.

El gran argumento que se hace es la dificultad enorme con que va á tropezar el candidato ó los candidatos para otorgar un sin número de poderes, dado el sin número de mesas que tienen que re-

cibir los votos. Quiere decir que cuando los candidatos no tengan personas de verdadera confianza, no nombrarán apoderados.

¿Qué es lo que busca la ley con esta medida? Busca designar personas que sean la representación de los intereses verdaderos, no que sean la representación del fraude, porque si cada apoderado ha de poder hacer lo que le dé la gana, pudiendo el candidato decir después: «El se ha extralimitado», tendremos viciado el acto electoral. Hay que establecer la responsabilidad en toda su extensión. De otra manera, votar este artículo, es fatalmente no hacer nada, es inútil, y entonces vamos á estar en las mismas de antes, en las mismas actuales, respecto de la representación de los fiscales.

**Sr. Ruiz Moreno**—Pido la palabra.

Ya que se ha tocado esta cuestión, voy á abordarla con un criterio puramente práctico.

En el hecho, señor presidente, los fiscales actuales, en las elecciones, son representantes de los candidatos, y van con instrucciones precisas. Van con la instrucción terminante de hacer respetar la ley en el acto electoral, ó van con el propósito de obstruccionar ese acto produciendo hechos contrarios á la ley, ejerciendo el fraude.

En este segundo caso, si el candidato ó el partido han dado esas instrucciones, justo es que carguen con la responsabilidad que trae aparejada la comisión de un delito por el apoderado: si no diesen esas instrucciones, ya que nadie es más realista que el rey, es seguro que el apoderado no cometerá una serie de hechos delictuosos: porque no se cometen á sabiendas y sin objeto determinado, hechos que son castigados por la ley. Si los comete dicho apoderado, es porque se le han dado instrucciones en ese sentido y porque tiene las espaldas guardadas.

Este es un hecho práctico y real, y creo entonces conveniente establecer la solidaridad, pues el apoderado que proceda en esa forma, repito, lo hará de acuerdo con instrucciones recibidas, las cuales deben hacer recaer sobre su mandante la responsabilidad consiguiente.

**Sr. Fonrouge**—Voy á recordarle que según el artículo 80.—y para terminar,—la responsabilidad de los mandantes no es más que hasta la suma de doscientos pesos.

**Varios señores diputados**—¿En cada caso?

**Sr. Presidente**—Se votará el artículo.

—Resultado negativa contra 25 votos.  
(Votan 60 señores diputados.)

—Sin observación, se aprueban los artículos 12 y 13.

—En discusión el 14.

**Sr. Fonrouge**—En este artículo hay un error de copia. En la parte que dice «por citación especial del gobernador respectivo», debe ser «por citación especial» nada más; porque debe referirse al presidente de la asamblea que es el que cita.

**Sr. Padilla (M. M.)**—En el final del artículo debe suprimirse también las palabras «por medio del gobernador».

**Sr. Fonrouge**—Sí, señor.

**Sr. Presidente**—Aprobado el artículo con la doble supresión.

**Sr. Olmedo**—Si me permite el señor presidente... ¿Y en las provincias en que las cámaras no tienen facultad para reunirse por sí mismas?

**Sr. Ministro del interior**—A eso responde la primera parte. La segunda se refiere al caso en que las cámaras no se reúnan; y entonces el Senado nacional puede requerirlas á fin de que verifiquen la elección.

**Sr. Presidente**—Quedará el artículo tal cual está, sin la segunda supresión.

**Sr. Avellaneda**—Podría agregarse «Senado nacional» ó «Senado de la Nación».

**Sr. Presidente**—Se va á leer el artículo tal como quedaría.

—El señor secretario lee:

Art. 14. Para la renovación ordinaria del Senado nacional, las cámaras legislativas, por citación especial, deberán reunirse y nombrar senadores antes del 1.º de marzo del año de la renovación. En caso de demora de la legislatura, el Senado de la Nación, por medio del gobernador respectivo, puede requerirla á fin de que verifique la elección.

**Sr. Ruiz Moreno**—Pido la palabra.

El señor diputado Olmedo acaba de hacer una observación, que creo que no ha sido mantenida, pero que considero de vital importancia.

Puede ocurrir que el gobernador no

haga la convocatoria, así como que el Senado de la Nación no dé cuenta de la vacante producida; el primer caso ocurrió en Córdoba en 1905. No obstante no haberse hecho por el Senado la comunicación del caso, es decir, de la existencia de una vacante, el gobernador convocó a la legislatura para que la asamblea legislativa designase Senador. En esa asamblea se hizo la cuestión, precisamente. Uno de los senadores sostuvo que esa asamblea era nula, porque faltaba la comunicación del Senado de la Nación. Y es posible que mañana también quiera sostenerse que es nula la elección de un senador, hecha por la legislatura de la provincia, si ésta, por imperio propio, se reuniese y designase senador sin haber sido convocada por el gobernador.

La pregunta del señor diputado Omedo, la repito ahora al señor presidente de la comisión, para que quiera decirme si entiende que la legislatura, aun cuando no mediase citación del gobernador, podrá reunirse y designar senador por la provincia; teniendo en cuenta que ese nombramiento es un acto atribuido a la legislatura, y es simplemente una fórmula la notificación, y también que el Senado de la Nación ha aceptado esa tesis, que yo tuve el honor de sostener, contestando al señor senador referido en la legislatura de Córdoba, es decir, que hacer el nombramiento, aun sin la comunicación oficial de la vacante, importaba realizar un acto perfectamente válido. El Senado de la Nación lo consideró así y aceptó el diploma del senador electo.

**Sr. Terán**—El artículo se refiere al caso de renovación ordinaria del Senado nacional, y se establece que las cámaras legislativas, por propia autoridad, por citación especial, deberán reunirse y nombrar senador, de manera que ellas no quedan sujetas a la autorización o a la citación de ningún otro poder. Son facultades y deberes que pueden cumplir las cámaras legislativas por su propia iniciativa.

**Sr. Ruiz Moreno**—Deseo, por lo menos, que quede constancia clara de cuál es el concepto dentro del cual se sanciona este artículo.

**Sr. Fonrouge**—Para la renovación extraordinaria, cuando se produce una vacante, está el artículo 15.

**Sr. Peña**—El artículo 54 de la Constitución, que parece se ha olvidado, resuelve el caso. Establece: «Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el gobierno a que correspondiera la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro».

**Sr. Varela**—Sin necesidad de comunicación alguna.

**Sr. Terán**—Es que no estamos discutiendo todavía el caso de renovación parcial, sino el caso de renovación ordinaria. En consecuencia, el artículo 14 está perfectamente redactado, con la supresión hecha por el señor presidente de la comisión.

**Sr. Peña**—Para la renovación ordinaria es cuestión de fijar la fecha, nada más.

—Se vota el artículo 14 y es aprobado.

—En discusión el artículo 15.

**Sr. Vocos Giménez**—Correspondería suprimir aquí las palabras referentes al gobernador.

**Sr. Fonrouge**—No es posible, porque el artículo 54 de la Constitución, que ha recordado el señor diputado por Córdoba, emplea los mismos términos.

Es un mandato imperativo de la Constitución que la ley no puede alterar.

—Se aprueba el artículo 15.

—En discusión el artículo 16.

**Sr. Fonrouge**—En este artículo hay un error de redacción; debe decirse «por conducto del presidente de la asamblea».

**Sr. Presidente**—Se votará con la corrección indicada.

—Se vota, y es aprobado.

—Pasa sin observación el artículo 17.

—En discusión el artículo 18.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Pido la palabra.

Desearía que la comisión me dijera si existe algún precepto de la Constitución o de la ley, que no conozco, que exija la mayoría absoluta de votos en el colegio electoral de la Capital para la elección de senador y la eliminación de los que tuvieran el menor número para

que quede la cuestión reducida a los dos de mayor número.

**Sr. Estrada**—Como en la de presidente de la República.

**Sr. Avellaneda**—El artículo 46 de la Constitución rige el caso. En la misma forma que para la elección de presidente.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Hacia la observación porque hay una diferencia fundamental con el procedimiento seguido en las legislaturas de provincia.

**Sr. Fonrouge**—Y «elegidos dice, en la forma prescripta para la elección de presidente de la Nación». Artículo 46.

**Sr. Peña**—Elegidos, los electores, pero no los senadores.

**Sr. Fonrouge**—No; los senadores.

**Sr. Peña**—Por mayoría.

**Sr. Fonrouge**—La Constitución establece que el Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia y dos de la Capital, elegidos en la forma prescripta para la elección de presidente. Como este se elige por segunda votación, por medio de electores, es fuera de duda que se refiere al colegio electoral.

**Sr. Peña**—Muy bien; elegidos por medio de electores, nada más; pero no establece la pluralidad absoluta.

Las legislaturas de provincia hacen la designación del senador a pluralidad y aquí se exige la mayoría absoluta.

Creo que objetaba eso el señor diputado por Tucumán...

**Sr. Padilla (M. M.)**—A eso iba mi pregunta. Porque cuando se trata de la elección de senadores por la legislatura, no hay prescripción que establezca la mayoría absoluta, y como el colegio electoral de la Capital, a estos efectos, reemplaza a la legislatura de provincia, es decir, hace el papel de tal, yo preguntaba si hay alguna disposición constitucional que establezca esta disparidad.

**Sr. Peña**—No hay. La regla debe ser a pluralidad, como se eligen los senadores por las legislaturas.

**Sr. Avellaneda**—Y la excepción es la elección de senadores de la Capital.

**Sr. Peña**—Excepción que establece esta ley y no la Constitución.

**Sr. Ministro del interior**—La ley anterior.

**Sr. Varela**—Es igual a la ley anterior.

**Sr. Fonrouge**—Es el artículo 88 de la ley vigente.

**Sr. Peña**—Es fundada la observación del señor diputado por Tucumán.

**Sr. Fonrouge**—Puede leerse el artículo 88 de la ley vigente.

**Sr. Peña**—Ya lo conocemos.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Eso no prueba nada. No se trata de alterar sino de conocer cuál es la razón que hay para esta disparidad.

**Sr. Presidente**—¿Propone alguna modificación el señor diputado por Tucumán?

**Sr. Padilla (M. M.)**—No, señor. Quería solamente conocer el motivo de la disposición.

**Sr. Peña**—Lo natural sería poner aquí a pluralidad, como se prescribe para la elección de senador por las legislaturas de provincia.

**Sr. Presidente**—¿Propone el señor diputado esa modificación?

**Sr. Peña**—Sí, señor.

**Sr. Presidente**—¿La comisión acepta?

**Sr. Avellaneda**—La comisión no puede aceptar porque el artículo establecido en el proyecto que discutimos tiene su origen en el artículo 46 de la Constitución que dice que los senadores por la Capital serán elegidos en la misma forma prescripta para la elección de presidente y vice de la Nación.

**Sr. Peña**—La consecuencia, entonces, de esa manifestación que hace el señor diputado, sería que en el caso de que no tuviera pluralidad de votos el candidato debiera elegirse por la asamblea legislativa entre los dos que tuvieran mayor número de votos, como se procede en el caso de la elección de presidente.

Eso prueba que el artículo 46 se refiere a la elección por medio de electores, por que no es explicable que para la asamblea legislativa de provincia se requiera la pluralidad, y que en el caso de la elección de senadores por la Capital no se haga lo mismo. No puede haber una regla en un caso y otra regla en otro. Lo natural es que la misma ley rijan en la capital de la República.

Propongo que se establezca la pluralidad, que es el término que la Constitución emplea para la elección de senadores por las legislaturas de provincia.



**Sr. Presidente**—Se va á votar el despacho de la comisión.

**Sr. Avellaneda**—La comisión no acepta.

**Sr. Terán**—Pido la palabra.

Voy á votar el artículo tal cual viene, porque entiendo que el artículo 46 de la Constitución no puede interpretarse en otra forma.

Ese artículo dice: que para el caso de senadores elegidos por las provincias se hará á pluralidad de sufragios, y que los dos senadores de la Capital serán elegidos en la forma prescripta para la elección de presidente y vice.

**Sr. Peña**—A pluralidad.

**Sr. Fonrouge**—Es claro, por electores.

**Sr. Terán**—Esa es la forma para la elección de presidente y vice. Y ante la duda, estoy de acuerdo con la práctica establecida.

**Sr. Peña**—Pido la palabra.

Me encuentro comprometido en este debate sin haberlo provocado. No hago cuestión sino de suprimir una anomalía...

**Sr. Pinedo**—¿De la Constitución?

**Sr. Peña**—De la ley vigente.

**Sr. Pinedo**—¿Y qué quiere decir entonces: «en la misma forma que el de presidente»?

**Sr. Peña**—Por medio de electores.

**Varios señores diputados**—¿No! ¡no!

**Sr. Terán**—Dice que los senadores serán elegidos como el presidente.

**Sr. Peña**—¿Cuál es la consecuencia que deberían sacar los señores diputados si no hubiera mayoría absoluta? ¿Debería el Congreso reunirse y elegir entre los dos senadores?

**Varios señores diputados**—¿No, señor!

**Sr. Peña**—Esa es la forma prescripta para la elección de presidente.

De todos modos esto no afecta mayormente. Creo que quedo con la razón; queden los contrarios con la disposición.

Que se vote.

**Sr. Roca**—¿Cómo resolvería la comisión este caso?

Bajo el régimen actual, el colegio electoral se reúne, designa sus candidatos y no hay mayoría absoluta para ninguno de los candidatos votados. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el colegio electoral?

**Sr. Fonrouge**—Lo dice el artículo 46 de la Constitución.

**Sr. Roca**—¿Quiere tener la bondad de leerlo?

**Sr. Fonrouge**—Sí, señor.

Dice así: «El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia elegidos por sus legislaturas á pluralidad de sufragios y dos de la Capital elegidos en la forma prescripta para la elección de presidente de la Nación...» Es decir, por medio de electores. En la votación siempre se observa la pluralidad, como en las asambleas legislativas.

**Sr. Peña**—¿Pero entonces me da toda la razón, el señor diputado!

**Sr. Presidente**—Si la comisión está de acuerdo no hay nada en discusión.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Está de acuerdo con lo que dice, pero no con el texto del proyecto.

**Sr. Roca**—Creo que hay que establecer el criterio de la pluralidad, porque los electores no pueden llevar otro mandato ni otra restricción á su mandato, que lo expresado en la Constitución; y no puede haber sanción alguna que imponga á decidirse entre dos candidatos determinados, que sería la única forma de solución en el caso que se exigiera la cláusula de la mayoría absoluta.

**Sr. Mugica**—Pido la palabra.

A mí me parece, señor presidente, que el artículo debe quedar tal cual lo propone la comisión.

La Constitución exige que los senadores de la Capital sean elegidos en la misma forma que el presidente y vice de la República.

En el caso de la elección de presidente y vice de la República, puede presentarse la circunstancia á que se refiere el señor diputado por Córdoba, de que el Congreso se vea en la necesidad de elegir él el presidente ó el vice de la República; pero esto es porque se trata de una elección practicada por diversos colegios electorales, por diversas asambleas de electores, en los cuales puede realmente ocurrir el caso de que ninguno de los candidatos reúna la mayoría absoluta de votos...

**Sr. Peña**—Y ese es mi argumento á favor: que es absurdo interpretar el artículo como lo están interpretando.

**Sr. Mugica**—Permitame... escúcheme; ya voy á concluir. El señor diputado debe tener en cuenta que la elección de

senadores se hace en una sola asamblea de electores, en la cual es siempre posible y fácil obtener una mayoría. Cuando en la primera votación de dos candidatos, ó de tres candidatos, ninguno tiene la mayoría absoluta, se aplica la regla ordinaria: se vota otra vez por los dos que han obtenido mayor número de votos, y en tal caso fatalmente tendrá que resultar un candidato con mayoría absoluta.

La prueba de que la Constitución no quiere aplicar en este caso la regla de la pluralidad, es que deja al Congreso la facultad de elegir á uno de los candidatos que haya obtenido mayor número de votos que otro.

Cuando no haya mayoría absoluta, el Congreso, la asamblea legislativa elige entre los dos que tienen mayor número; pero bien puede elegir el que tiene menor número entre esos dos. Luego entonces, no es la pluralidad la que prima.

**Sr. Peña**—Una última consideración voy á hacer.

Lo que yo desearía que los señores sostenedores del artículo de la comisión me explicaran, es esto: ¿por qué la Constitución exige la pluralidad para la elección de senadores por las asambleas legislativas de provincias, y por qué habría de requerir la pluralidad absoluta para la elección de senadores de la Capital, por electores que ejecutan una función igual á la de los diputados y senadores de provincia? Explicado esto, yo estoy conforme; si no, no.

**Sr. González Bonorino**—El artículo 84, me parece que resuelve el punto.

**Sr. Mugica**—Se lo voy á explicar al señor diputado.

**Sr. Peña**—¿Si ya sé que no me lo va explicar!...

**Sr. Mugica**—Perdóneme... le voy á explicar cuál ha sido el propósito: se trata de determinar lo que establece expresamente un artículo de la Constitución.

**Sr. Peña**—Lo que razonablemente establece el artículo de la Constitución, es lo que yo quiero que se determine.

**Sr. Mugica**—En este caso no se puede establecer una similitud absoluta entre procesos enteramente distintos. La elección de senador por las legislaturas de provincia, no es lo mismo que la elección de senador por electores. ¿Por qué ha de aplicar el señor diputado una re-

gla absolutamente igual á dos procesos que son distintos?

**Sr. Peña**—Pero desde el momento que son idénticos los dos procesos en el acto de votar, quiero la misma regla.

**Sr. Mugica**—No son idénticos.

**Sr. Peña**—Por lo demás, creo que se ha discutido ya bastante, y se puede votar.

**Sr. Fonrouge**—Está aclarado todo.

**Sr. Presidente**—Se va á votar el artículo 18, tal cual lo ha despachado la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se aprueban sin observación los artículos 19 á 22.

—En discusión el 23.

**Sr. Vocos Giménez**—Pido la palabra.

Para preguntar á la comisión si no habría conveniencia en fijar la misma fecha, último domingo de marzo, para las elecciones de electores de presidente y vice. ¿Cuál es la razón de indicar un día distinto, con tan pocos días de diferencia?

**Sr. Presidente**—Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Fonrouge**—Pido la palabra.

**Sr. Presidente**—Ya se la había concedido.

**Sr. Fonrouge**—Aquí no ha habido más que una razón de simple comodidad, para no perturbar un acto político de la mayor trascendencia como es la elección de electores de presidente y vicepresidente de la República.

**Sr. Vocos Giménez**—Indudablemente, habría mayor conveniencia en hacer el mismo día todas las elecciones.

—Se da por aprobado el artículo 23.

—Pasa sin observación el 24.

—En discusión el artículo 25.

**Sr. Fonrouge**—Al final de la primera parte de este artículo donde dice «el Poder ejecutivo» debe agregarse «nacional», y lo mismo al final de la segunda parte.

**Sr. Meyer Pellegrini**—Pido la palabra.

Voy á pedir á la comisión quiera aceptar una pequeña modificación en este artículo, que creo tendrá resultados prácticos muy favorables.

La modificación que solicitaría es la de extender la serie de doscientos á trescientos ciudadanos.

Por de pronto, se ve que con este pequeño cambio se disminuye en un cincuenta por ciento el número de mesas que por la ley habría que establecer, lo que simplificará tanto la tarea al Poder ejecutivo como la de los partidos políticos que nombrarán menos apoderados que en la actualidad.

La primitiva limitación de las series á doscientos ciudadanos, cuyas prácticas excelentes todos hemos podido observar, ha mostrado, sin embargo, que ese número es demasiado reducido para ocupar á una mesa electoral ó á un presidente de comicio durante todas las horas de elección. Los que han presenciado elecciones, habrán observado que con la serie de doscientos, la mesa recibe cinco ó diez votantes por hora. Aceptando, por ejemplo, que con la nueva ley votara un setenta por ciento, serían ciento cuarenta ciudadanos que lo harían en las ocho horas de reunión de la mesa, lo que daría diez y ocho votantes por hora.

Creo que habría una gran ventaja en aceptar el aumento que propongo, sobre todo en las campañas y en las provincias.

No olviden los señores diputados que por esta nueva ley, cada comarca de provincia con doscientos habitantes, formará un comicio, circunstancia que hará que en las comarcas despobladas se tropiece con muchísimas dificultades, no sólo para encontrar el lugar en que ha de instalarse el comicio, sino también para el servicio de policía que él requiere, para los representantes de los partidos que dirigen la elección y también para la gente alfabeta, como me observa un colega por la Capital, capaz de llenar las funciones que la ley atribuye á los que están encargados de su aplicación.

Sin querer ampliar los argumentos que podría aducir en favor de la idea que propongo, creo que habría positivas ventajas en aumentar las series de doscientos á trescientos ciudadanos por cada mesa.

**Sr. Fonrouge**—Pido la palabra.

La comisión en este caso ha tenido en cuenta la división hecha por la ley vigente, que en la práctica ha dado re-

sultados muy buenos, porque ha consultado la descentralización del comicio, que, fuera de duda, es un principio adelantado sobre nuestras prácticas electorales. Además, esta división tiene la ventaja de evitar la aglomeración de electores, y por consiguiente, las dificultades muy naturales que pueden producirse en momentos apasionados.

No he tenido tiempo de cambiar ideas sobre este punto con mis colegas de comisión; pero como es una cuestión experimental, y como el que está llamado á intervenir más directamente en ella, por lo que se refiere á la formación de mesas, lo es el Poder ejecutivo, creo que sería el caso de oír al señor ministro.

**Sr. Ministro del interior**—Pido la palabra.

Al proponer en el proyecto primitivo la serie de doscientos ciudadanos, no hice más que seguir la práctica establecida; pero indudablemente, las observaciones del señor diputado por la Capital son muy serias.

Caleulo que se tendrán que formar cuatro mil mesas, por series de doscientos. Quitando una tercera parte, queda reducida la cantidad de mesas indicadas á dos mil setecientas próximamente. De esa manera es mucho más fácil encontrar la gente competente para que desempeñe las funciones de presidente de comicio, es más fácil encontrar los centros adecuados para la instalación de las mesas, el trabajo es menor, y puesto que, según los datos de los hombres experimentados, cómodamente pueden votar trescientos ciudadanos en una mesa, creo que se puede hacer la modificación.

**Sr. Roca**—Pido la palabra.

A mí me parece muy justa la observación del señor diputado Meyer Pellegrini y la que acaba de hacer el señor ministro en lo que se refiere á la capital de la República, porque en ella el factor distancia desaparece; pero en las campañas no sucede lo mismo, y la mesa reducida tendrá la ventaja incontestable de poder estar más próxima de los electores y hacer, por consiguiente, más fácil el voto.

La dificultad de encontrar gente capaz para desempeñar las funciones de presidente de comicio, me parece que no sería un inconveniente de mayor consideración.

**Sr. Ministro del interior**—Ese punto ya viene resuelto en el artículo 26.

**Sr. Terán**—La ley que hemos sancionado sobre padrón cívico establece que se remitirán las listas de enrolados por series de doscientos. ¿Cómo vamos á establecer ahora estas series de trescientos, cuando ya las listas van á ser confeccionadas por series de doscientos?

**Sr. Vocos Giménez**—Votaré por el artículo tal como viene formulado por la comisión, por series de doscientos, porque considero que las series mayores de ese número serán inconvenientes para la campaña. En las ciudades, donde las distancias son pequeñas, quizá hubiera conveniencia en aumentar las series á trescientos, cuatrocientos y quizás á quinientos, considerando el elemento tiempo, porque en ocho horas puede votar ese número. Pero en la campaña, en los puntos despoblados, donde se organizan series de doscientos inscriptos que viven á grandes distancias los unos de los otros, habría más conveniencia, en vez de aumentarlas á trescientos, reducirlas á cien. Por eso creo que sería mejor quedarse con el número que se ha proyectado.

**Sr. González Bonorino**—Las obligaciones que esta ley impone al presidente del comicio, como ser: la de comprobar la identidad de cada elector; la de abrir y cerrar el cuarto donde se ensobran las boletas, la de firmar los sobres, tomar impresiones digitales, la de dar el recibo en caso de ser impugnado uno de los electores y que tenga que hacer el depósito que indica la ley, etc., me parece que son excesivas para esos presidentes alfabetos de nuestras campañas, pero cuyo alfabetismo y capacidad todos sabemos hasta dónde llega.

Por eso creo que para que esas funciones sean más holgadas y puedan desempeñarse, en vez de aumentar el número que constituye la serie, debiéramos disminuirlo en lo que se refiere á las provincias.

**Sr. Varela**—Tampoco acepta la comisión.

**Sr. González Bonorino**—Los ciudadanos que se elijan para presidir los comicios sabrán perfectamente desempeñarse en la capital de la República y en algunas otras ciudades; pero en la provincia de Buenos Aires, como en todas las demás, donde esos elementos no

abundan tanto, me parece que será menos fácil encontrar los que puedan desempeñar tan delicada función.

**Sr. Ministro del interior**—Este artículo 25 trata sólo de la organización de colegios y mesas de la capital de la República y capitales de provincia; y el artículo 26 se ocupa de la formación de los colegios y mesas en los pueblos rurales.

De manera, pues, que podría aceptarse las series de trescientos en el artículo 25, y conservarse las de doscientos en el artículo 26.

**Sr. Fonrouge**—El señor diputado González Bonorino ha dado razones que yo considero justas y completamente terminantes, y son aquellas que se refieren al cúmulo de funciones que va á tener que desempeñar el presidente del comicio. Son muchas; ya no es la mesa de antes. De manera que agregar cien votantes más en cada mesa es crear muchas dificultades, fuera de que, como ha dicho el señor diputado por Córdoba, debe tenerse en cuenta que las listas que deben remitir los jueces federales, según la ley de empadronamiento vigente, han de ser por series de doscientos.

No es posible, pues, alterar el sistema establecido, y en virtud de esto la comisión mantiene el artículo.

**Sr. Lacasa**—Pido la palabra.

Deseo significar lo siguiente á la honorable cámara: que no es posible reformar este artículo en la capital de la República.

Cuando se establecieron las series de doscientos, pudo observarse la diferencia que introdujo en el modo de ser de los comicios. Además, hay un artículo que esta misma ley que prohíbe la reunión de votantes en ninguna forma, y no es posible, entonces, aumentar todavía el número de los que han de concurrir al mismo local de elección; contra las disposiciones de la ley, se formarían aglomeraciones y demás inconvenientes que se ha tratado de evitar mediante la descentralización de los comicios y la reducción del número de votantes en cada mesa.

**Sr. Castañeda Vega**—Pido la palabra.

Voy á adherir decididamente á la proposición del señor diputado Meyer Pellegrini, en el sentido de elevar á tres-



cientos el número de ciudadanos de cada serie, haciendo extensivo á la campaña este aumento de las series, porque considero que allí es donde menos debe propenderse á la subdivisión del comicio, debiendo favorecerse más bien la tendencia contraria, para así evitar dificultades en la aplicación e interpretación de la ley en el acto electoral.

Es un hecho notorio que en nuestras campañas, sobre todo en el interior no abundan los hombres con preparación suficiente para presidir estos actos electorales, observando y haciendo observar la ley en su letra y en su espíritu; y es entonces que se impone, como un medio de salvar la dificultad, la necesidad de aumentar las series, reduciendo el número de comicios, á fin de poder poner al frente de ellos hombres capaces de presidir un acto tan importante y que requiere cierta preparación.

Por consiguiente, votaré en contra de las series de doscientos, á favor del aumento á trescientos.

**Sr. Presidente**—Se votará el despacho de la comisión.

—Es aprobado.

—En discusión el artículo 26.

**Sr. Varela**—Donde dice «ciudadanos enrolados», hay un error: debe decir: «empadronados».

**Sr. Fonrouge**—Es una regla general. No se habla más que de ciudadanos empadronados.

**Sr. Castañeda Vega**—Pido la palabra.

Desearía una explicación del señor miembro informante de la comisión sobre la manera cómo se podría subsanar el inconveniente que va á presentarse en las campañas de las provincias donde no hay ciudadanos idóneos para organizar los comicios y aplicar la nueva ley, en forma y en condiciones que los errores que cometan por su falta de preparación no sean causa y motivo de anulación del acto electoral en que intervengan; y si no considera que, precisamente por esa falta de elemento idóneo para la aplicación e interpretación de la ley, no sería más conveniente aumentar el número de las series, de 200 á 300 inscriptos, para subdividir menos el comicio, facilitando la aplicación de la ley con ciudadanos más

preparados, desde que es de suponer que en una serie de mayor número de ciudadanos empadronados, ha de ser más fácil encontrar mayor número de ciudadanos aptos.

**Sr. Estrada**—¿Y hasta ahora cómo se ha hecho?

**Sr. Fonrouge**—La formación del distrito ó la porción de territorio donde debe funcionar cada mesa va á ser determinada por el Poder ejecutivo nacional, y las funciones de presidente de comicio están determinadas en la ley, siendo nombrados por una junta. De manera que el que realmente va á dirigir la elección en el caso de esta ley, es el presidente del comicio que será un ciudadano idóneo, porque tiene que serlo de acuerdo con lo que la misma ley establece.

**Sr. Castañeda Vega**—Pero tiene que estar inscripto en la serie.

**Sr. Fonrouge**—El artículo 31 resuelve la duda que tiene el señor diputado. El establece que el presidente del comicio ha de reunir las condiciones siguientes: ser elector en ejercicio; contribuyente territorial, saber leer y escribir y residir en el colegio electoral; agregando que se hará el nombramiento de un presidente y dos suplentes para cada mesa, y que en el caso de que en un colegio electoral no existan ciudadanos con las condiciones requeridas, puede dispensarse en el nombramiento de presidente y primer suplente la condición de residencia en colegio; y el del segundo suplente, la de un contribuyente territorial. De manera que en el colegio electoral que no exista un ciudadano idóneo la junta lo elegirá de otra serie.

**Sr. Castañeda Vega**—Precisamente, esa excepción viene á confirmar la observación que hacía, porque ya implica una previsión de la dificultad apuntada, y mayor tiene que ser el número de excepciones cuanto más subdividido esté el comicio y menor cuanto menos se subdivida. Por eso, proponía que en vez de 200 se elevara á 300 el número de la serie para hacer menos numerosas las excepciones.

**Sr. Estrada**—Hasta ahora las series han sido de 200 y no ha habido ningún inconveniente. Además, la ley prevé el caso de que no haya inscriptos idóneos

en una serie dada, autorizando á tomarlos de otra. De tal manera, que esta ley importa una mejora sobre el sistema actual.

—Se aprueba el artículo 26.

—En discusión el artículo 27.

**Sr. Fonrouge**—El «Poder ejecutivo de la Nación», debe decir.

**Sr. Varela**—En todos los casos hay que poner «el Poder ejecutivo de la Nación».

—Se aprueba el artículo en la forma siguiente:

Art. 27. Todo grupo de más de ciento cincuenta ciudadanos empadronados que habiten dispersos en aldeas ó habitaciones aisladas en el campo, constituyen también un colegio electoral en una sola mesa, y el Poder ejecutivo de la Nación determinará el lugar en que deberá congregarse sin salir de los límites del respectivo departamento ó partido.

—Se dan por aprobados los artículos 28, 29 y 30.

**Sr. Castex**—Pido la palabra.

Me permito hacer notar que, habiéndose suprimido algunos artículos, será necesario corregir toda la numeración.

**Sr. Presidente**—Sí, señor; se hará por secretaría.

**Sr. Varela**—O la comisión misma hará una revisión de redacción.

—En discusión el artículo 31.

**Sr. Fonrouge**—El último párrafo está suprimido. Por un error de copia se ha incluido en el despacho.

**Sr. Presidente**—En discusión, salvo el último párrafo.

**Sr. Lacasa**—Pido la palabra.

Voy á oponerme á una parte de este artículo: la que establece como condición para ser presidente del comicio ser propietario.

Creo que no se puede dar á la condición de propietario ninguna superioridad moral sobre los demás ciudadanos, porque es un accidente de la vida: una persona puede ser muy llena de capacidad, de aptitudes, de patriotismo y no tener ninguna propiedad.

Además, si esto se considera un deber, una carga, no se puede hacerla

recaer sobre una persona porque tenga una situación más ventajosa que otra. Las cargas deben ser iguales según la Constitución.

Me parece que la comisión podría aceptar esta supresión, que facilitaría el nombramiento de presidente del comicio, dejando las demás condiciones que se proyectan.

**Sr. Fonrouge**—Pido la palabra.

En el proyecto primitivo, que se dió á la copia, estaba suprimida la palabra territorial.

**Sr. Lacasa**—Está bien.

**Sr. Roca**—Podría agregarse en este artículo, entre las condiciones para ser presidente del comicio, la de tener diploma de una profesión liberal, porque puede haber diplomados que no paguen contribución.

**Sr. Varela**—Alguna patente pagan.

**Sr. Roca**—Yo soy abogado y no pago ninguna patente. Luego, ¿no podría ser presidente de comicio?

**Sr. Varela**—Paga patente por la tablilla.

**Sr. Roca**—Eso será los que tienen tablilla, los que tienen estudio.

**Sr. Fonrouge**—Podría agregarse eso.

**Sr. Presidente**—¿La comisión les permite á los abogados sin tablilla ser presidente de comicio?

**Sr. Fonrouge**—Sí, señor.

—Se aprueba el artículo 31 con las modificaciones indicadas, quedando sancionado en esta forma:

La mesa está constituida por un funcionario denominado presidente de comicio, que reuna las condiciones siguientes: ser elector en ejercicio, contribuyente ó diplomado en profesión liberal, saber leer y escribir y residir en el colegio electoral.

La junta escrutadora á que se refiere el artículo 51 de esta ley, hará los nombramientos de un presidente y dos suplentes para cada mesa, y en el caso de que en un colegio electoral no existan ciudadanos con las condiciones requeridas, puede dispensarse en el nombramiento de presidente y primer suplente la condición de residencia en el colegio y el del segundo suplente la de ser contribuyente ó diplomado en profesión liberal.

—En discusión el artículo 32.

**Sr. Padilla (M. M.)**—En este artículo habría que suprimir también la palabra «territoriales».

**Sr. Lacasa**—Habría que suprimir el artículo.

**Sr. Meyer Pellegrini**—¿Y en la Cámara quién manda la lista?

**Sr. Vocos Giménez**—Me parece que en el artículo anterior se ha suprimido la exigencia de ser contribuyente territorial; entonces habría que suprimirla también en este artículo.

**Sr. Presidente**—Ya está suprimida la palabra «territoriales».

**Sr. Fonrouge**—Mejor sería suprimir el artículo.

**Sr. Peña**—¿Y quién va a remitir las listas?

**Sr. Fonrouge**—El juez, al hacer los nombramientos, tendrá en cuenta en cada caso...

**Sr. Peña**—¿Y cómo va a saber el juez?

**Sr. Fonrouge**—¿Cómo no va a saber? La junta al hacer los nombramientos tendrá que saber las condiciones de cada uno.

**Sr. Peña**—¿Lo adivinarán?

**Sr. Fonrouge**—Si resulta que no reúne las condiciones de la ley, el mismo juez lo suprimirá.

**Sr. Estrada**—Pero ¿cómo se llegará, por medio de las juntas escrutadoras a tener conocimiento de las personas que reúnan los requisitos del artículo 31?

Si se suprime el artículo 32, las juntas escrutadoras no van a tener autoridad, por mandato de la ley, para solicitar los datos. De modo que quizá sería conveniente reemplazar este artículo por otro que dijera: «A los efectos del artículo anterior, las juntas escrutadoras quedan facultadas a solicitar de las oficinas y autoridades respectivas las listas de contribuyentes del distrito».

**Sr. Terán**—Se podría dar al artículo una forma más amplia: «A los efectos del artículo anterior, las juntas escrutadoras quedan facultadas para solicitar de las autoridades respectivas los datos y antecedentes que estimen necesarios para el lleno de su cometido».

**Sr. Estrada**—Es, más o menos, lo mismo.

**Sr. Presidente**—Muy bien; se va a votar en esta última forma.

—Se vota, y resulta afirmativa.

**Sr. Fonrouge**—Hay que agregar aquí un artículo, que está suprimido en la copia y que dice: «A fin de asegurar la libertad, seguridad e inmunidad de los presidentes y suplentes de comicios, ninguna autoridad, nacional o provincial, podrá reducirlos a prisión durante las horas de la elección en que deban desempeñar sus funciones, salvo el caso de flagrante delito».

Es una disposición que se ha suprimido de la copia, y que es necesaria para asegurar la inmunidad de estos funcionarios, que son el eje del acto electoral.

**Sr. Presidente**—Hay que votar antes el artículo 33.

—Se lee el artículo 33.

**Sr. Terán**—Pido la palabra.

Para proponer un pequeño agregado en este artículo. Después de la palabra «residencia», decir: «podrán votar en la mesa en que ejerzan esas funciones».

**Sr. Ministro del interior**—No perjudica, porque la ley, más adelante, dice que votarán primero.

**Sr. Presidente**—No habiendo oposición, aprobado el artículo, con el agregado propuesto.

—Queda el artículo en esta forma:

Art. 33. Los presidentes o suplentes que ejerzan sus funciones fuera del colegio de su residencia, podrán votar en la mesa de que forman parte y recibirán del gobierno de la Nación un viático de cincuenta pesos moneda nacional.

## 5

## MOCIÓN

## SESIONES DIARIAS

**Sr. Padilla (E. E.)**—Pido la palabra.

Se impone, señor presidente, la necesidad de terminar pronto la sanción de esta ley. El trabajo parlamentario está suspendido como consecuencia de esta larga tramitación que se hace sólo tres veces por semana.

Por este motivo, creo del caso insistir en una moción, que hasta el presente no ha sido afortunada, pero que creo se impondrá a nuestra consideración como una verdadera necesidad, cual es

la de celebrar sesiones diarias hasta que se concluya con la tramitación de este asunto.

Hago, pues, moción en este sentido.

**Sr. Estrada**—Estoy de acuerdo con la idea del señor diputado, pero creo que es más factible reunir a la cámara de noche.

**Sr. Lacasa**—Creo que con dos o tres sesiones más, va a terminar esta ley y que no hay necesidad en esta violencia, máxime cuando la comisión de presupuesto no se ha expedido todavía.

**Sr. Padilla (E. E.)**—Pero están los asuntos de obras públicas y otros muy importantes que reclaman la atención de la cámara.

Hay también que tener en cuenta que este proyecto tiene que pasar al Senado donde debe ser estudiado.

**Sr. Conforti**—¿Las sesiones diarias serían mientras se discute esta ley?

**Sr. Padilla (M. M.)**—Sí, señor.

**Sr. Varela**—En lo que queda de la ley, me parece que no hay puntos que den motivo a una larga discusión.

**Sr. Presidente**—Se votará la moción de celebrar sesiones diarias.

—Resulta afirmativa.

## 6

## LEY ELECTORAL

**Sr. Presidente**—Continúa la discusión de la ley electoral.

—El señor secretario Supena lee el artículo propuesto por la comisión:

A fin de asegurar la libertad, seguridad e inmunidades de los presidentes y suplentes de comicio, ninguna autoridad nacional o provincial podrá reducirlos a prisión durante las horas de la elección en que deben desempeñar sus funciones, salvo el caso de flagrante delito.

**Sr. Padilla (M. M.)**—¿Y esto no está establecido ya en los principios generales, con relación al elector?

**Sr. Fonrouge**—Con relación a los electores, sí.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Entonces con mayor razón con relación al presidente del comicio.

**Sr. Fonrouge**—Así debiera ser; pero es mejor dejarlo establecido claramente.

**Sr. Presidente**—Mantiene el artículo la comisión?

**Sr. Varela**—Sí, señor.

—Se vota el artículo en la forma leída, y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 34.

**Sr. Vocos Giménez**—Pido la palabra. ¿A qué jueces federales se refiere este artículo, dado que en algunas provincias hay más de un juez federal?

**Sr. Fonrouge**—Es valor entendido, al que tiene la función electoral conferida por la ley.

**Sr. Castex**—Deseo hacer notar un error gramatical.

En la página 12, renglón 5.º, al referirse a la dirección de correos, se dice «quien».

La dirección de correos no es una persona, luego no le corresponde la palabra «quien», sino las palabras «la que».

**Sr. Presidente**—Con la corrección gramatical, queda aprobado el artículo.

—En discusión el artículo 35.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Noto aquí un ligero error.

En alguna parte de la ley, no recuerdo cuál precisamente, se establece la obligación de concurrir a la apertura del comicio, el presidente y suplentes. Aquí se dice: «ó sus suplentes»; debe decir: «y sus suplentes».

**Sr. Fonrouge**—Sí, señor; pero el artículo tiene otras cosas que corregir.

Hay que suprimir «por la partida cívica» que es un error de copia; no se necesita más que acreditar la identidad personal de los apoderados.

Debe suprimirse también «si la urna está vacía», porque esta urna debe llevarla el presidente del comicio, habiendo quedado la llave en poder de la junta, no es posible hacer la verificación... a menos que se viole la urna.

**Sr. Rodríguez Jurado**—Desearía que el señor presidente de la comisión me informase si una elección que diese principio un poco después de las ocho y cuarto u ocho y media podría considerarse válida.

Puede darse el caso de que los presidentes de comicio y suplentes se retarden un poco, y me parece que sería demasiado rigorismo invalidar una elección por esa causa. Aquí, sin embargo, se fija una hora tan matemática que parece significar una regla absoluta de que no sería posible desviarse, sin comprometer la legalidad de una elección. Por la ley actual se fijan las ocho de la mañana para instalar la mesa; y para empezar la votación, las nueve. Esto se explica porque en ese intervalo se levantan las actas, etc. Pero aquí nada se especifica al respecto, y sólo se establece una hora fija para empezar la votación.

**Sr. Fonrouge**—El mismo inconveniente que apunta el señor diputado lo presenta la ley actual.

Por la ley vigente la elección ha de empezar á las nueve. Pero puede empezar á las diez, y la dificultad existiría siempre.

No me parece indispensable que en la ley se determinen con precisión todos estos detalles. Forzosamente han de quedar muchas cosas libradas á la buena fe de los concurrentes al acto electoral.

Una tolerancia de minutos, de un cuarto de hora, quizá de más tiempo, podrá dispensarse en muchos casos, sobre todo cuando no se trate de maniobras fraudulentas, sino de casos de fuerza mayor. Es evidente que cuando esto se produzca, si hay partido perjudicado, presentará sus protestas, y entonces el juez de la elección, la Cámara de diputados, ó quien lo fuere, apreciará las circunstancias y resolverá lo que sea más oportuno.

Pero no es posible llevar tan lejos las previsiones de la ley.

**Sr. Rodríguez Jurado**—¿De manera que la elección será válida aunque empiece á las ocho y media? Perfectamente.

**Sr. Fonrouge**—No; permítame...

Contestando á la pregunta del señor diputado, le digo: la letra mata y el espíritu vivifica; no hay que llevar las cosas á los extremos.

Es probable que en caso como esos, no se haga mérito de un retardo de un cuarto de hora, y aparezca la elección como empezada á las ocho. Es lo que

se llamaría «une mensonge», sobre todo cuando á nadie se perjudicase.

**Sr. Rodríguez Jurado**—Sería una falsedad.

**Sr. Fonrouge**—No, señor; la legislación penal francesa distingue perfectamente entre «mensonge» y falsedad, siendo esta última un delito. La «mensonge», como á nadie daña, no puede ser castigada.

**Sr. Vocos Giménez**—¿No incurriría en responsabilidad penal por las disposiciones de esta ley?

**Sr. Roca**—Pido la palabra.

Desearía saber del señor miembro informante si se ha previsto el caso de que, constituida la mesa bajo la presidencia de un suplente, por ausencia del titular, tendría éste que cederle el puesto, en caso de que se presentase más tarde.

**Sr. Padilla (E. E.)**—Debe entrar el titular á ocupar su puesto.

**Sr. Fonrouge**—A mi juicio, la ley no puede comprender todos los casos. Es la cámara, juez de la elección, la que apreciará las circunstancias y resolverá la validez, ó no del acto.

Mi opinión personal es que, presentándose el titular, que tiene por la ley la investidura del cargo, el suplente debe entregarle la dirección del comicio.

**Sr. Presidente**—Otra «mensonge»... (Risas.)

**Sr. Vocos Giménez**—Otra violación de la ley electoral.

**Sr. Fonrouge**—Todo lo que es doloso, es violación. En lo que no se haga por razón de dolo, de mala fe, en el procedimiento electoral, la prueba estará á cargo del que acuse.

—Se aprueba el artículo en debate.

—En discusión el artículo 37.

**Sr. Fonrouge**—Se debe suprimir las palabras «partida cívica» y reemplazarlas por «libreta de enrolamiento». No hay partida cívica.

—Se lee el artículo en discusión en la forma siguiente:

Art. 37. Abierto el acto electoral, procederán los electores á presentarse al presidente del comicio, por el orden en que lleguen, dando su nombre y presentando su libreta de enrolamiento, á fin de comprobar que les corresponde votar en la mesa.

Dentro del recinto del comicio, no podrán aglomerarse más de diez electores que no estén acreditados ante la mesa.

**Sr. Terán**—Pido la palabra.

Desearía saber qué quiere decir esto de diez electores que no están acreditados ante la mesa.

**Sr. Fonrouge**—Que no sean apoderados.

**Sr. Vocos Giménez**—De manera que si hay más de diez apoderados, sólo se pueden admitir diez.

**Sr. Fonrouge**—No, señor; diez electores.

—Se da por aprobado el artículo 37, así como el 38.

—En discusión el 39.

**Sr. Castex**—¿Cuál es el objeto de que el sobre deba ser firmado por el presidente del comicio?

**Sr. Meyer Pellegrini**—Se dice más adelante en otro artículo.

**Sr. Presidente**—Queda aplazada la pregunta del señor diputado.

**Sr. Castex**—Para poder votar con conciencia sobre este artículo, deseo saber á qué objeto responde que el sobre que se entrega deba ser firmado por el presidente del comicio.

**Sr. Fonrouge**—Para evitar que haya substitución de sobres, ó sea de votos. Ese es el contralor que hay: el presidente el comicio entrega un sobre firmado; y dentro de él se pone la boleta.

**Sr. Varela**—En vez de ponerle un sello se pone la firma.

**Sr. Castex**—Hacia la observación porque me parece que el sello consagraria la inviolabilidad del voto, su secreto, y la firma no, pues si se tiene presente que al firmar el sobre que se entrega á cada ciudadano se puede poner una señal de cierta clase, se comprende que es fácil luego reconocer el voto, mientras que no sería posible sellándolo.

Creo, pues, que debería estar sellado y no firmado el sobre que se entregue al votante, porque en esta última forma no hay secreto del voto.

**Sr. Varela**—Es el presidente del comicio el que firma el sobre al entregarlo al votante: después no lo vuelve á ver.

**Sr. Castex**—¿Y cuando se computan los votos?

**Sr. Acosta**—No los computa, manda la urna.

—Se aprueba el artículo.

—En discusión el artículo 40.

**Sr. Castex**—Pido la palabra.

Para proponer una pequeña modificación en la primera parte del artículo 40: esto es, que se ponga la palabra «colocándola» en vez de «metiéndola», como dice el proyecto.

**Sr. Fonrouge**—No hay inconveniente.

**Sr. González Bonorino**—Para hacer otra pequeña observación.

Donde dice «tomando la impresión digital del elector», creo que debería establecerse si es el pulgar de la mano derecha ó de ambas manos.

**Sr. Vocos Giménez**—Pido la palabra.

Voy á hacer una observación á uno de los párrafos que comprende este artículo, que dice: «El elector impugnado, después de haber sufragado, será arrestado á la orden del presidente del comicio», etc.

Me parece que es una medida sumamente delicada quedar constituido en prisión por el solo hecho de que un apoderado de un candidato impugne al elector la legitimidad de su voto; y desde el momento que existen en el país todos los medios legales para castigar estos delitos, no encuentro razón para que por el sólo hecho de una denuncia, que puede ser interesada é injusta, se detenga inmediatamente al elector impugnado.

**Sr. Fonrouge**—Pido la palabra.

Este artículo tiene una razón moralizadora. Contra el peligro posible á que alude el señor diputado existe la práctica muy conocida de la gente que va á votar con el voto de otro; es decir, que suplanta al elector. Eso, la práctica lo ha demostrado constantemente. De manera que autorizar la detención del falso elector es un acto moralizador que inmediatamente se comunica al resto de los electores, produciendo efectos morales de primer orden.

Por otra parte, el procedimiento que debe seguirse — dar inmediatamente cuenta al juez federal — es sumamente sencillo. Si el detenido es inocente, una vez que se ha comprobado que es realmente el elector, sale en libertad sin mayor pérdida de tiempo, ó puede salir

bajo fianza; y si ha sido calumniado, no es necesario que se establezca en esta ley una responsabilidad por la falsa acusación, porque está la ley penal que autoriza al que ha sido acusado de haber cometido ese delito, de acusar á su vez por calumnia al autor de ella.

Hay que tener en cuenta que de cien acusados, noventa y nueve serán acusados de verdad; es decir, que realmente habrán cometido delito.

Estas son las razones que ha tenido la comisión para aceptar el artículo del Poder ejecutivo, y pedir á nombre de él, con el mayor empeño, quiera votarlo la cámara, porque se trata de una disposición que tiene un propósito altamente moralizador.

**Sr. Vocos Giménez**—Pido la palabra.

Pido que se vote por partes este artículo, porque votaré en contra de esta disposición.

Uno de los inconvenientes que encuentro en esta ley, es que se legisla con un criterio justificado para la capital de la República, pero no para el interior del país. Decir que á un elector impugnado y arrestado, *ipso facto* se le pone inmediatamente á disposición del juez federal, está muy bien en la capital de la República; pero hay que tener en cuenta que en la campaña, en el interior, muchas veces el juez federal está á muy larga distancia.

Si ya queda constatada la identidad de la persona con la impresión digital y con todos los otros elementos de control que se establecen en la ley, ¿qué objeto habría en detenerlo inmediatamente por un hecho que tal vez resulte equivocado, en cuyo caso se habría hecho sufrir una cantidad de molestias al elector, que no tienen justificación de ninguna naturaleza?

Queda constatada, en el momento de depositar el voto, la identidad del votante: queda determinada su persona para ser sometida á la responsabilidad que la misma ley establece.

Votaré en contra de este párrafo.

**Sr. Fonrouge**—La misma ley vigente autoriza á las mesas á mandar presos á los falsos electores.

**Sr. Vocos Giménez**—A las mesas.

**Sr. Fonrouge**—El presidente del comicio es el que representa la autoridad de la mesa, y él, entonces, tiene esta facultad.

**Sr. Vocos Giménez**—Aquí se dice, simplemente: «impugnado». De manera que un elector de un partido queda á merced de la buena ó mala voluntad que le tenga el apoderado de un candidato contrario. Es un punto muy grave.

**Sr. González Bonorino**—Otra consideración que determinará mi voto en contra del párrafo objetado, es la siguiente: en él se establece el derecho del presidente del comicio para designar policías *ad hoc*, es decir, ciudadanos inscriptos en el comicio que preside. Puede resultar entonces, que si se arresta á un ciudadano impugnado por uno de los apoderados y queda á la orden del presidente del comicio, en una de esas mesas apartadas de los centros de población, donde no existen comisarias ó juzgados, se exponga á perjuicios, molestias ó inconvenientes que no deben autorizarse en la ley, y que, repito, fácilmente se provocarían en comicios rurales. Desearía que la comisión tuviera esto en cuenta para modificar el artículo, á fin de evitar en lo posible los abusos.

**Sr. Terán**—Pido la palabra.

Votaría yo este artículo con toda tranquilidad, si hubiera quedado incorporada como prescripción de esta ley, la relativa al voto obligatorio. No habiendo quedado incorporada, tengo que oponerme, por esta razón: tratamos de conseguir la mayor afluencia de electores al comicio, á los efectos de prestigiar el acto electoral con el mayor número de votantes.

En nuestras campañas, los electores, generalmente poco preparados, ante el solo hecho de la amenaza de que podrán ser arrestados y perjudicados en esta forma, tan solo por una impugnación del apoderado, se sentirán muy inclinados á no concurrir á la elección; no tendrán de ninguna manera deseos de ir á votar, cuando sepan que pueden ser perjudicados, nada menos que con la privación de su propia libertad. En consecuencia, lejos de obtener una afluencia de la gente al comicio, que es lo que debe buscarse con esta ley, vamos á tener un motivo más para que la gente se retraiga y no concurre.

Por esta razón, y en vista de haberse rechazado el voto obligatorio, voy á oponerme también á este artículo.

**Sr. Calvo**—Pido la palabra.

Creo que la ley, en esta forma, va á proceder automáticamente, cayendo solamente sobre los que sean verdaderamente fraudulentos.

Sabemos que todos los que van á votar lo hacen obedeciendo á un grupo en que hay algún ciudadano de cierta espectabilidad. Si el votante es verdadero, no le faltará nunca la garantía de ese ciudadano para responder por él; por consiguiente, saldrá en libertad inmediatamente. El falso, tendrá mucha dificultad en encontrar quien lo garantice, y por consiguiente quedará arrestado, que es lo que nosotros buscamos.

**Sr. Fonrouge**—Pido la palabra.

Deseo hacer valer una consideración final para mantener el artículo tal cual está. Es ésta: en estos momentos se trata de dictar una ley electoral lo más perfecta posible, que cierre por completo las puertas al fraude. Quiere decir, que aquí habremos consignado un principio más adelantado en contra del fraude, porque la ley electoral vigente y aun la de las provincias, especialmente la de Buenos Aires, consigna la facultad de mandar arrestado al falso elector.

**Sr. Terán**—Pero no por la simple impugnación.

**Sr. Fonrouge**—La impugnación que se hace bajo la responsabilidad del apoderado.

**Sr. Castex**—Una cosa es la comprobación de un delito, y otra la imputación de un delito.

**Sr. Fonrouge**—Se hace argumento de una cuestión de palabras.

Quando se dice «la impugnación», es entendido que es la afirmación categórica por parte del representante de un partido, ó de los candidatos.

Sostengo que es mucho más moralizador el proyecto de la comisión, porque el señor diputado Bonorino se coloca en uno de esos casos hipotéticos de que no exista policía sino á una distancia de cincuenta leguas del lugar en donde se realiza el comicio.

**Sr. González Bonorino**—No he dicho eso.

**Sr. Fonrouge**—Esto no sucede en ninguna parte de la República, porque la instalación de un comicio supone la existencia de un destacamento.

Por otra parte, la vigilancia que el

presidente del comicio está autorizado á hacer ejercer por ciudadanos, en los casos que determina el mismo despacho, es sólo para el acto de la elección y no para la custodia de los detenidos.

Vuelvo á repetir que aquí se trata de algo que significa moralizar, y lo que se propone viene á autorizar el fraude, y mucho más injustamente en las campañas, donde el paisano se confunde con otros paisanos, donde se ha suprimido, por razones conocidas, la formalidad de la fotografía en la libreta de enrolamiento, y donde, por consiguiente, los casos de suplantación van á ser comunes. No es posible suprimir toda esta garantía precisamente nada más que por las hipótesis que se plantean, y ya sabemos que en el orden de las hipótesis, se puede ir muy lejos.

Afirmo que la experiencia demuestra que el fraude puede cometerse por los representantes de los candidatos, y que el fraude mayor es el que se refiere á los votos en que no sólo no aparecen votando los inscriptos vivos, sino también los muertos.

Lo que se viene á proponer es algo que significa un retroceso.

Estas son las razones que tengo, á nombre de la comisión, para insistir en este artículo.

**Sr. González Bonorino**—Rogaría al señor diputado me dijera dónde quedarían arrestados los electores impugnados, que, como lo autoriza esta ley, fueran detenidos en un comicio que se encuentre á 8, 10 ó 15 leguas de un centro donde exista policía, como ocurre frecuentemente en la campaña de la provincia de Buenos Aires.

**Sr. Fonrouge**—Este ejemplo, ya se lo contestaré con este otro: en el caso de que se cometa un delito en las mismas circunstancias, es decir, que no haya policía, ¿qué se hace con el delincuente? Se le detiene, porque se trata simplemente de eso. Y es eso justamente lo que habría que hacer con ese elector: asegurarlo, porque se trata de una simple impugnación.

El señor diputado, para extremar su tesis, se ha colocado en un caso rarísimo, que estoy seguro no va á ocurrir: se ha colocado en el caso de que haya un solo comicio, que se realice en la casa misma del presidente. Es imposible que donde

exista una agrupación de vecinos suficiente para formar un comicio, no haya una población, por lo menos, de tres mil, dos mil ó mil quinientos habitantes, lo que supone la existencia de una autoridad policial, un juez de paz, un alcalde, un comisario.

El señor diputado se coloca en un caso extremo, que, me atrevo á decir, no se va á presentar.

**Sr. González Bonorino**—Afirmo que en la provincia de Buenos Aires pasan de doscientos los centros urbanos en que no hay policía suficiente para esta descentralización de comicios.

**Sr. Fonrouge**—Habrán centros en que no haya policía, pero en ninguna parte se encontrará que falta á veinte leguas á la redonda. Conozco muy bien la provin-

cia de Buenos Aires. Sé que no hay ninguna población de cuatrocientos habitantes que diste veinte leguas de un pueblo cabeza de partido.

Vuelvo á repetir que estos son casos extremos, hipotéticos y que no es posible con ellos querer destruir esto que es uno de los puntos más interesantes del proyecto, porque tiende precisamente á perseguir el fraude, que es la peor enfermedad de nuestras elecciones.

**Sr. Meyer Pellegrini**—Quisiera saber si hay número en la casa, señor presidente.

**Sr. Presidente**—No, señor diputado. Habiendo quedado sin quorum la cámara, la invito á pasar á cuarto intermedio.

—Así se hace, siendo las 7 y 5 p. m.